

Paraguay: una democracia fragil

FERNANDO MASI¹

En este trabajo, se propone realizar una breve reseña de las políticas económicas y sociales de la primera experiencia de gobiernos democráticos en Paraguay, diferenciando un primer periodo, denominado de transición a la democracia; y un segundo, de democracia plena (sin la injerencia del poder militar).

Se pone especial atención a las reformas económicas aplicadas, como también a los cambios en las políticas sociales ocurridos a partir de la primera década de este siglo. Se hacen consideraciones sobre el predominio político del Partido Colorado (en el poder desde 1947) en este periodo democrático, así como sobre el breve periodo de la primera experiencia de alternancia política en el país, y cómo estos gobiernos han permitido o no las modificaciones necesarias en el Estado y en la economía del país.

Se concluye que la agenda, todavía inconclusa, para transformar el modelo económico y social del país se enfrenta hoy al peligro de un autoritarismo de nuevo cuño.

Antecedentes: los primeros años postdictadura

Durante la primera década luego de la caída de la dictadura (1954-1989), el país ingresó a una etapa de transición a la democracia. Este periodo de los

¹ Sociólogo y economista con maestría en Política y Economía Internacional (SAIS-The Johns Hopkins University). Investigador y director del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP).

años noventa se caracterizó por acciones gubernamentales tendientes a dejar de lado el aislamiento internacional, al cual Paraguay se encontraba sometido. Para ello, en el ámbito político-social, se adhirió a acuerdos internacionales y regionales sobre derechos humanos, laborales y protección social. Internamente, se promulga una nueva Constitución Nacional, un nuevo Código Electoral y se promueven elecciones libres. En el campo económico, se unió al MERCOSUR y a la Organización Mundial del Comercio (OMC), y promulgó otras normativas en cuanto a política fiscal, financiera y de apoyo al sector productivo.

Esta nueva inserción de Paraguay en el mundo fue acompañada, sin embargo, por un modelo económico *sui generis*, que no permitía un crecimiento económico sostenido ni reducción de la pobreza y las desigualdades sociales. También lo acompañó una falta de alternancia política en el Gobierno y una persistencia del poder militar en el partido oficialista, se mantuvo así un peligro latente para la construcción de la democracia.

El modelo económico se sostenía en tres bases: i) agroexportación; ii) reexportación o comercio de triangulación² y iii) venta de energía hidroeléctrica a países vecinos. En los años noventa, la agroexportación no tuvo una alta productividad y contó con bajos valores de exportación. Además, el cultivo de la soya empezó a reducir drásticamente el espacio de la pequeña agricultura e inició un proceso de deforestación de escala mayor. La reexportación superó tres veces a la exportación de bienes originarios del país y sólo benefició a las regiones fronterizas de Paraguay. Por último, la venta de energía eléctrica a los vecinos reflejó la falta de planes de industrialización del país, desde el momento en que, casi un 90% de lo que le correspondía a las represas binacionales de Itaipú y Yacyreta no se consumía en el país.

Este modelo económico no seguía las tradicionales políticas de sustitución de importaciones de los países vecinos, ni tampoco contaba con una presencia fuerte del Estado como regulador del mercado y productor. A diferencia de sus vecinos, Paraguay presentaba un constante equilibrio macroeconómico y un endeudamiento público poco significativo. Se presentaba como una economía muy abierta, aunque con bajos niveles de competitividad y bienestar social.

La alianza del Partido Colorado (oficialista) y el Ejército, que por 35 años sostuvo la dictadura de Stroessner, siguió predominando la política paraguaya-

² Consistente en la importación, con aranceles bajos, de bienes de consumo suntuarios de países asiáticos, europeos y Estados Unidos, y su reventa en la frontera a los países vecinos que imponen altos impuestos a estos bienes.

ya de los años noventa. Con la apertura democrática, la oposición logró ganar gobiernos locales y tener mayoría en el Congreso durante un periodo (1993-98)³, pero no llegaba a la presidencia de la república. Por su parte, el poder militar continuó siendo determinante en las elecciones de 1993 y 1998, mediante la figura de un nuevo caudillo que presagiaba la vuelta al autoritarismo. Esta situación llevó a intentos de golpe de Estado (1996) y a una crisis política-institucional (1998), que se resolvió con la renuncia del presidente y la salida del país del nuevo caudillo militar⁴. Luego de la crisis, se conformó un “Gobierno de Unidad Nacional” (1999-2003), con la participación de la oposición en el gabinete ministerial. Sin embargo, la salida del principal opositor de este gabinete, al poco tiempo, una recesión económica, iniciada en 1999 y un bajo grado de gobernabilidad en este periodo, hizo que el país atravesara una primera crisis económica y política, en la etapa democrática, con consecuencias graves para el Estado y la población.

Transición Democrática: políticas públicas y resultados

Las políticas económicas de la última década del siglo pasado en América Latina tuvieron como marco el Consenso de Washington, fórmulas para reducir la intervención del Estado en la economía, promover la apertura comercial y realizar ajustes para lograr un equilibrio macroeconómico más sostenido. En el caso de Paraguay, los desafíos no pasaban por la apertura comercial ni por el equilibrio macroeconómico, tampoco por reducir la intervención estatal (de por sí ya con rol mínimo en la economía), sino dotar a la política económica y social de instrumentos institucionales nuevos y fortalecer a un Estado con poca capacidad reguladora y recaudadora, y con una débil institucionalidad para enfrentar a las prácticas del clientelismo político y la corrupción.

En el ámbito de las políticas económicas, se pone en marcha una reforma tributaria y una reorganización del Ministerio de Hacienda, al mismo tiempo de negociar la mora de la deuda externa del país, comparativamente de me-

³ Los dos partidos tradicionales y centenarios de Paraguay son el Colorado y el Liberal. A partir de 1993, surgió un tercer espacio político como oposición al Partido Colorado en el poder desde 1947.

⁴ El presidente Raúl Cubas fue elegido en 1998 y renunció nueve meses después, ante un inminente juicio político. Con esta renuncia, abandonó el país su principal aliado, el General Lino Oviedo, causante de una inestabilidad política que llegó a luchas callejeras y asesinatos de jóvenes en Asunción, la Capital.

nor escala que los demás países de América del Sur. Asimismo, se establece una nueva Carta Orgánica del Banco Central, una nueva ley de Bancos y Financieras, para fortalecer la supervisión de las mismas, y una ley de creación del mercado de valores. En apoyo al sector productivo, se instalaron varios regímenes de incentivos a la inversión en la industria y de promoción de exportaciones para acompañar el proceso de integración regional. Con pocas empresas estatales, comparativamente a sus pares de la región, Paraguay inició un proceso de privatización de algunas dedicadas al transporte y a la producción de acero y alcohol. Sin embargo, este proceso estuvo acompañado de graves falencias en la venta de estas empresas (Borda, Masi, 2021a).

La dictadura de Stroessner dejó al país con indicadores sociales y de bienestar muy bajos en educación, salud y protección social. Los gobiernos de la transición democrática no incrementaron el presupuesto de las instituciones estatales destinadas a servicios sociales. Sólo crearon nuevos organismos como la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Acción Social y nuevas normativas como el Sistema Nacional de la Salud y la reforma educativa, por citar los principales (Borda, Masi, 2021). Así, las políticas sociales, muy necesarias para un país de menor desarrollo relativo, seguían ausentes en este primer momento de la postdictadura en Paraguay.

Los números económicos de esta década indicaban la recuperación del crecimiento económico y los esfuerzos por restaurar el equilibrio macroeconómico a partir de 1990. La economía creció a un promedio anual del 3.7% hasta 1998, mientras la inflación, que alcanzó un máximo histórico del 44% en 1990, se redujo al 6% en 1997. El déficit fiscal se mantuvo en niveles bajos y controlables, resultado del aumento del gasto y de la inversión pública en infraestructura física. Luego que el saldo de la deuda externa alcanzó un máximo del 20% sobre el PIB en 1989, como consecuencia de la acumulación de la mora de la deuda pública, mantuvo un promedio del 15% en todo el periodo⁵.

Los indicadores sociales, sin embargo, eran preocupantes al mostrar que el 41% de los habitantes se encontraban bajo la línea de pobreza y el 12% bajo la línea de pobreza extrema. La mayor parte de la pobreza se concentraba en el área rural con un 54.6%. Por su lado, el Coeficiente de Gini mostró un alto nivel de desigualdad de los ingresos con 0.54⁶.

⁵ Datos extraídos de Cuentas Nacionales del Banco Central del Paraguay (BCP) y de Informes de Finanzas Públicas del Ministerio de Hacienda (MH) del Paraguay.

⁶ Datos de las Encuestas Permanentes de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El Coeficiente de Gini es un índice que va de 0 a 1. Cuanto más cerca de 0 se encuentra el índice, menor desigualdad de ingresos existe.

Las reformas económicas e institucionales de los años noventa tuvieron nula continuidad en el último periodo de gobierno de la transición democrática en Paraguay (1998-2003). Por el contrario, éste se caracterizó por una recesión económica, como consecuencia de las crisis económicas de Argentina y Brasil, déficits fiscales constantes, un incremento significativo de la deuda externa pública y de la pobreza.

A pesar de la promulgación de leyes para un mejor manejo del presupuesto general de la nación y reformas institucionales en el ámbito educativo y salud, en este periodo, las condiciones económicas y sociales sufrieron un deterioro importante y, por lo tanto, no acompañaron ciertos cambios institucionales en el Estado. Los indicadores económicos y sociales denotaban, con claridad, esta situación. Además de un crecimiento económico nulo, se mantuvo un déficit fiscal de alrededor del 2% del PIB, una drástica devaluación del signo monetario y dolarización de los depósitos, una inflación creciente que llegó a dos dígitos al final del ciclo y un aumento muy preocupante de la deuda externa pública que alcanzó el 31% del PIB en 2003⁷. Toda esta situación condujo al Estado encontrarse al borde de la cesación de pagos (default) en 2003, obligando a un acuerdo stand by con el FMI. Los números sociales eran aún más dramáticos, con un nivel de pobreza trepando al 51% en 2003 y una pobreza rural del 58% y sin modificación en los niveles de desigualdad de ingresos, en relación con años anteriores.

La crisis política desatada a fines de los noventa a partir de las luchas intestinas del partido oficialista y de la continuidad de la influencia militar en las decisiones políticas, terminó por dividir al partido, se retiraron los seguidores del caudillo militar y se formó un nuevo partido, que participaría en las siguientes elecciones nacionales de la primera década del presente siglo⁸. Un partido de gobierno debilitado tras esta crisis, con relativo apoyo de la oposición, demostró, sin embargo, una frágil gobernabilidad, con altos niveles de corrupción y fue objeto de nuevos intentos de golpes de Estado y juicios políticos.

Para la elección de 2003, la oposición tuvo la oportunidad de llegar a la presidencia ante un Partido Colorado dividido. Sin embargo, la decisión de los principales partidos opositores de presentarse con dos o más chapas presidenciales permitió nuevamente la victoria del partido oficialista, aunque con un porcentaje reducido de votos. De todas maneras, por primera vez, el

⁷ Datos de cuentas nacionales del BCP.

⁸ Lino Oviedo creó el Partido UNACE que obtuvo 15% de los votos en 2003 y 22% en 2008, afectando el caudal electoral del Partido Colorado y llevando a su eventual derrota luego de 61 años en el poder (2008).

presidente electo provino del cuadro político del Partido Colorado, no fue escogido por la milicia y no tenía vínculos con los grupos económicos influyentes. Parece contradictorio, pero el Gobierno de Nicanor Duarte Frutos se mostró afín a reformas económicas más profundas, a un gasto social más elevado, a una política exterior más independiente y permitió la primera alternancia pacífica, en toda la historia de Paraguay, con la elección de Fernando Lugo en 2008.

La década del crecimiento económico y de las reformas sociales

Entre 2003 y 2013, el *boom* de los commodities trajo aparejados cambios en el modelo económico paraguayo y, por primera vez, se iniciaron y consolidaron políticas públicas orientadas al aumento de los gastos sociales y al combate a la pobreza.

Este *boom* (aumento de los precios internacionales de bienes agrícolas), los cambios tecnológicos ocurridos en la ganadería y cultivos extensivos de la soya y el maíz, con el consecuente aumento de la productividad de estos rubros, más la recuperación de las economías de Argentina y Brasil, influyeron para un crecimiento sostenido de la economía paraguaya por más de una década.

Notable fue el incremento de producción de la soya, el maíz y la carne en Paraguay, desde la primera década de este siglo, lo que dio lugar a un proceso significativo de industrialización agrícola de los alimentos producidos y la aparición de otros productos que pueden ser industrializados como arroz, trigo, azúcar orgánico y toda la cadena de lácteos. Con ello, se produjo una “revolución industrial” en el país, que definitivamente incidió en la agroexportación. Tan importante fue esta industrialización agroalimentaria que sus valores de producción y exportación superaron con creces a las operaciones de reexportación del país. Al mismo tiempo, esta agroindustrialización significó un aumento de la inversión nacional y, sobre todo, extranjera que llegó a sus máximos niveles entre 2009 y 2012, durante el Gobierno de Lugo.

Este crecimiento económico sostenido fue acompañado —a partir del Gobierno de Duarte Frutos— de reformas fundamentales de las finanzas públicas, la banca pública y el sistema financiero, con lo cual se restauraba el equilibrio macroeconómico perdido entre 1999 y 2003, se evitaba la cesación de pagos del Estado y se diseñaba un nuevo sistema tributario, orientado a una mayor formalización de la economía y a un aumento de las recaudaciones impositivas (Borda, Masi, 2021a).

Esta situación económica favorable más una voluntad política de los dos gobiernos de este periodo y una mayor preocupación sobre el bienestar de la población, crearon las condiciones para un aumento significativo de los gastos sociales públicos, por primera vez en la etapa democrática del país. Así, de un total de gastos sociales que representó menos del 5% del PIB antes de 2003, este coeficiente aumentó al 8.4% en 2013 al final del Gobierno Lugo⁹. A los incrementos en el presupuesto de educación y salud, servicios sociales universales, se agregaron los programas focalizados en el combate a la pobreza. Varios de estos programas se crearon e iniciaron en el Gobierno de Duarte Frutos y otros en el Gobierno de Lugo, cuando su cobertura se expandió sustancialmente¹⁰.

La salud pública ha sido una de las áreas que vio triplicar su presupuesto y donde se produjeron transformaciones en este periodo. Estas transformaciones tuvieron lugar en el Gobierno de Fernando Lugo (2008-2013) y significó una ruptura con políticas anteriores. Una de las primeras medidas para ampliar la cobertura de la salud fue la creación de 754 Unidades de Salud Familiar (USF), ubicadas principalmente en localidades con altas tasas de pobreza, como una estrategia renovada de Atención Primaria de la Salud. Otras dos medidas importantes, fueron creación de las Redes Integradas de Servicios de la Salud (RISS) y el Fondo Nacional de Recursos Solidarios de la Salud (FONARESS). La primera orientada a hacer más eficientes los servicios de salud pública, y la segunda para dar cobertura a enfermedades de alta complejidad. Vinculada a esta última medida se implementó, gradualmente, la gratuidad de medicamentos, consultas, intervenciones quirúrgicas menores y otras, para reducir los gastos del bolsillo de las familias que acuden a las unidades. A estas decisiones, se sumaron otras relativas a la descentralización de la salud pública y a la mejora y transparencia en la gestión del ministerio (Gaete, 2021).

En el campo de la educación, en este decenio se fortaleció la Educación Básica, se hizo la reforma de la Educación Media y se instauró la Educación Básica bilingüe (Elías 2014). El Gobierno de Lugo elaboró un Plan Nacional de Educación (2011), que se fijó como metas principales: mayor inclusión social, mejorar la calidad educativa y llevar adelante la reforma de la educación superior. El año anterior, este mismo Gobierno dispuso la gratuidad de la educación inicial y de la educación media (Elías, 2014).

⁹ Datos de Informes de Finanzas Públicas del Ministerio de Hacienda.

¹⁰ Tekopora (transferencias condicionadas para combatir la pobreza extrema), Abrazo (transferencias condicionadas para niños pobres), merienda escolar para escuelas públicas y pensión alimentaria para adultos mayores en situación de pobreza, han sido los principales programas.

La política de crecimiento económico con desarrollo social de Lugo tuvo como marco el Plan Estratégico Económico y Social (PEES), y la disponibilidad de mayores recursos para los servicios sociales universales (educación, salud) y para los programas de combate a la pobreza, que fue posible a través de la Política Pública de Desarrollo Social (PPDS) y la creación del Gabinete Social.

Tanto el Gobierno de Duarte Frutos como el de Lugo iniciaron una nueva política exterior, basada en un esfuerzo por despegarse del alineamiento estricto a sus dos socios principales (Estados Unidos y Brasil), herencia del régimen autoritario. Resultado de una actitud proactiva de Paraguay en el Mercosur (regional) y la obtención de reivindicaciones históricas con Brasil, principalmente, en la hidroeléctrica binacional Itaipú (Masi, Rojas, 2019). Uno y otro Gobierno obtuvieron logros importantes en diversas negociaciones de la venta de energía eléctrica a Brasil. Pero fue el Gobierno de Lugo el que logró un acuerdo histórico con Brasil, que significó, entre otras cosas, el aumento de la tarifa de energía que le cedió, cuyos montos resultantes dieron lugar al FONACIDE, fondo utilizado preferentemente para el sector educativo, pero también para salud, obras de infraestructura y banca pública (Borda, Masi, 2021a).

El crecimiento económico sostenido de este decenio fue acompañado de una reducción, también sostenida, de la inflación (3.7% para 2013), del saldo de la deuda pública externa (7% para 2013) y de la ausencia de déficit fiscal. A ello, se sumó un incremento de la inversión pública en obras de infraestructura a partir de 2011 y de una reducción de la pobreza de 51 a 43%, en el periodo 2003-2008, y de 43 a 28% en el periodo 2008-2013. Es evidente que este crecimiento ha tenido una importante incidencia en esta reducción de la pobreza. Pero también le ayudó el incremento del gasto social y la creación de programas sociales focalizados.

La agenda inconclusa

A pesar de los cambios ocurridos en el modelo económico, en la primera década del presente siglo éstos no generaron mayores modificaciones de la matriz productiva del país. Una matriz que se caracteriza por su dualidad. Es decir, por un lado, se encuentra el sector de agronegocios (cadenas de soya y ganado), con alta productividad, uso extensivo de capital e intensivo de tierra. Por otro, las micro y pequeñas empresas que operan en el comercio y servicios, y la agricultura familiar campesina, ambos segmentos con intenso

empleo y baja productividad (Borda, Masi, 2021b). A ello se suma, que el sector de agronegocios acumuló más beneficios, con un crecimiento económico sostenido, sin embargo, contribuyó menos en recaudaciones impositivas¹¹. Al mismo tiempo, causó más deforestación en los últimos treinta años, con consecuencias negativas sobre los ecosistemas, la biodiversidad y la producción sostenible.

Un segundo problema del modelo económico es la existencia de un amplio sector de la población ocupada en actividades informales¹², es decir, con ingresos muy bajos y sin beneficios de protección social (salud y jubilación). La dualidad de la matriz productiva, más la informalidad económica prevalente conduce a altos grados de desigualdad en la distribución de oportunidades e ingresos. Un crecimiento económico con alta disparidad de ingresos no permite una reducción rápida de la pobreza. Esta situación se presentó en los últimos años, cuando este crecimiento promedio del 4% anual no fue suficiente para acelerar la disminución de la pobreza¹³.

Aun cuando el presupuesto de servicios educativos y de salud aumentó sustancialmente a partir de 2003, y también el financiamiento público para programas de lucha contra la pobreza y protección social, es patente la falta de recursos financieros del Estado para cumplir con las metas mínimas de cobertura de estos servicios. Los gastos en salud, por ejemplo, alcanzan solamente el 3% del PIB, cuando lo mínimo (según la OMS) requerido es el 6%. De la misma forma, el presupuesto de educación representa tan sólo el 3.4% del PIB, ante el mínimo del 7% requerido (de acuerdo a la UNESCO).

El problema de recursos del Estado paraguayo no se concentra necesariamente en las irregularidades del gasto público, sino en una baja presión tributaria (10% del PIB)¹⁴, bajas tasas impositivas, alta evasión y múltiples exenciones FISCALES. Mientras que el malgasto público tiene su origen en las prácticas históricas del Partido Colorado: clientelismo político y corrupción.

Todas estas limitaciones del modelo económico y del Estado constituyeron los desafíos para el primer gobierno de oposición, que inició en 2008

¹¹ Un lobby muy fuerte del sector de agronegocios logró crear muchas excepciones y múltiples deducciones en sus contribuciones impositivas. Una reforma tributaria de 2019 se encargó de eliminar casi todas estas excepciones y deducciones, pero la contribución impositiva de este sector sigue siendo reducida.

¹² Alrededor del 65% de la población económicamente activa (PEA), según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

¹³ La pobreza que se había reducido al 28% para 2013, solamente se redujo al 25% para 2018 y actualmente al 27% de la población (datos del INE).

¹⁴ Presión tributaria: recaudaciones totales del Estado sobre el PIB.

con la presidencia de Fernando Lugo, una alianza entre el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), principal partido opositor, de centroderecha, y fuerzas progresistas, representadas por diversos partidos de izquierda y centroizquierda¹⁵. Desafortunadamente las acciones de políticas públicas iniciadas para enfrentar estos desafíos no continuaron por la interrupción abrupta del Gobierno de Lugo, mediante un “juicio político”. Varias fueron las razones que dieron fin a la única experiencia de un gobierno de la oposición: la falta de experiencia de la alianza en el manejo político del Estado, ser incómodo a las fuerzas conservadoras representadas en el Partido Colorado y, en buena parte, del PLRA, fuerza mayoritaria en el Congreso Nacional, las políticas sociales implementadas por este gobierno y la resistencia de las fuerzas a todas las reformas para obtener más recursos para el Estado.

La vuelta del Partido Colorado al poder no solamente significó la postergación necesaria a reformas del Estado y de las políticas económicas y sociales, sino también un deterioro mayor de las instituciones públicas y de la independencia de los poderes. La figura elegida como presidente de la nación (2013-2018), provenía de un poderoso grupo económico, cuyas actividades no fueron precisamente lícitas y terminaron minando la relativa independencia del Poder Judicial, manteniendo una clientela importante en el Congreso Nacional y teniendo cautivo al Partido Colorado en el Gobierno¹⁶. Además de una creciente actividad del narcotráfico en los últimos diez años, que provocó el aumento de las operaciones criminales y de lavado del dinero, inficionando al propio Estado y a sus representantes en los tres poderes. Así, se asiste actualmente a una reedición, de nuevo cuño, del stronismo¹⁷ donde el poder dominante de las fuerzas armadas se reemplazó por una plutocracia criminal, que tiende a una concentración absoluta del poder político y económico, y a un sometimiento de las instituciones del Estado.

¹⁵ Los partidos de izquierda, antes y durante el Gobierno de Lugo, estaban representados por el Partido País Solidario (PPS) y el Partido Democrático Popular (PDP), con escasas bancas en ambas Cámaras del Congreso. Desde 2013, varios de estos partidos y otros formados durante este Gobierno crearon el Frente Guazú, principal referente actual de la izquierda, con un número de bancas importantes en el Senado.

¹⁶ Aun cuando el movimiento del expresidente Horacio Cartes no haya ganado las elecciones internas del Partido Colorado para candidato a la presidencia (2018-2023), sigue teniendo mayoría en la conducción de ese partido y manteniendo una influencia decisiva sobre las decisiones del Gobierno.

¹⁷ Nombre dado a la dictadura más larga de Paraguay (1954-1989), cuya cabeza fue el general Alfredo Stroessner.

A modo de conclusión

En 1989, Paraguay inició el primer proceso democrático de toda su historia. Superar los obstáculos políticos, económicos y sociales de un régimen autoritario de larga data era el desafío para construir un Estado de derecho, una economía competitiva y un mayor bienestar para su población.

En términos del Estado de Derecho, varios análisis realizados concluyen que, con el tipo de gobernabilidad prevalente, se ha dado una democracia de baja calidad. En cuanto a la competitividad económica, sólo se ha manifestado en el sector tecnificado de la agricultura y la agroindustria. Con respecto al bienestar, si bien se ha logrado reducir la pobreza, las desigualdades de ingresos y oportunidades resaltan y hay pocas expectativas para acortar esas brechas.

La permanencia del Partido Colorado en los años de la democracia —con una sola interrupción de cinco años— no ha permitido una democracia para la mayoría y se refleja en las distintas encuestas, indican que la ciudadanía paraguaya considera que el país gobierna para pocos (Abente, 2019). A ello, se agrega el peligro, provocado por el propio Partido Colorado, de instaurarse en el país un stronismo de nuevo cuño, que genere una dictadura económica y política con fachada democrática.

Referencias bibliográficas

- Abente Brun, Diego, (2019), *La Democracia del Desencanto*, El Lector- ABC Color, Serie: 30 años de la Democracia, Asunción.
- Borda, Dionisio, y Fernando Masi, (2021)a, “Una mirada al desempeño económico y social”, en Borda Dionisio y Fernando Masi, (eds.), *Políticas Públicas en Paraguay. Avances y Desafíos 1989-2020*, CADEP, Asunción.
- Borda, Dionisio y Fernando Masi, (2021)b, “Camino Recorrido y los Retos Futuros”, en Borda, Dionisio y Fernando Masi, (eds.). *Políticas Públicas en Paraguay. Avances y Desafíos 1989-2020*. CADEP, Asunción.
- Elías, Rodolfo, (2014), “La Reforma Educativa Paraguaya: Base Conceptual, Políticas, Planes y Programas”, Paraguay Debate-Instituto Desarrollo, en [<http://paraguaydebate.org.py/wp-content/uploads/2014/08/01-10-2015-14-44-23-288717650.pdf>].
- Gaete, Rubén (2021), “Políticas de Inversión en Capital Humano: Salud”, en Borda, Dionisio y Fernando Masi, (eds.), *Políticas Públicas en Paraguay. Avances y Desafíos 1989-2020*, CADEP, Asunción.

- Masi, Fernando y Gustavo Rojas, (2019), La Inserción Internacional del Paraguay en Democracia, El Lector- ABC Color, Serie: 30 años de la Democracia, Asunción.
- Serafini, Verónica, (2019), Pobreza en Paraguay. Crecimiento económico y conflicto redistributivo, CADEP-CONACYT-PROCIENCIA, Asunción.
- Serafini, Verónica, (2018), La Protección Social en el Paraguay y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, CADEP-CONACYT-PROCIENCIA, Asunción.